

Inversión

Pública y Desarrollo

Agropecuario



Derecho a producir*

Arantxa Guereña Tomás

Ingeniera agrónoma y especialista en ambiente y desarrollo.

La agricultura ya no es la base de las economías suramericanas pero sigue siendo estratégica en el empleo, la balanza comercial, el crecimiento económico, equilibrio territorial y seguridad alimentaria. Los gobiernos de la región deben revisar su sesgo hacia la agroexportación, su miopía de género, garantizar el equilibrio en el acceso a la tierra y el agua y situar la pequeña agricultura en el centro de las políticas agrarias y de inversión pública. Esta sería una vía para reducir la pobreza y la desigualdad.

Con ese breve pero contundente resumen, Arantxa Guereña inicia la presentación del texto cuyo contenido se resume en la presente versión 77 de la serie Diálogos. La base del documento de Guereña fueron seis estudios nacionales (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú) encargados por Oxfam, en el marco de su campaña CRECE.

Tras la crisis por la escalada en el precio de los alimentos en 2007/08 –que por primera vez hizo que la cifra de personas que sufren hambre superase los mil millones- la inversión en agricultura volvió al primer plano de las preocupaciones de los gobiernos, las agencias internacionales de desarrollo y los organismos financieros internacionales.

Durante los dos años siguientes se comprometieron recursos para impulsar la producción y disponibilidad de alimentos. Sin embargo, la crisis económica y el afán por reducir el déficit público están imponiendo drásticos recortes en los presupuestos nacionales y de la ayuda al desarrollo, en 2009, la ayuda oficial al desarrollo global descendió en términos reales, por primera vez en muchos años.

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Alimentación (FAO) calcula que la inversión pública global en el sector agrícola debería crecer en torno al 50%, desde los actuales 142.000 hasta 209.000 millones de dólares anuales. Esto incluye las inversiones

* El contenido de esta nota fue extraído textualmente del documento Derecho a producir: Invertir más y mejor en la pequeña agricultura de América del Sur, elaborado por Arantxa Guereña a solicitud de Oxfam, en el marco de su campaña CRECE. Octubre de 2011. Para acceder al documento completo ir a http://www.sudamericarural.org/index.php?mc=45&nc=3&next_p=2&cod=198 o http://www.boliviarural.org/crece/public/uploads/articulos/derechoaproducir_oxfamcrece-04102011.pdf

que se necesitan para estimular la producción agrícola, así como los servicios de almacenamiento y procesamiento para reducir las grandes pérdidas post-cosecha (éstos últimos, de acuerdo con el organismo, deberían proceder mayoritariamente de fuentes privadas). Sin embargo esta cifra no contempla la inversión pública necesaria para ampliar las redes de caminos rurales ni la infraestructura de riego y electrificación rural, y tampoco otros servicios básicos para el desarrollo rural como la salud y la educación.

La agricultura en la región

La mayoría de los países de América del Sur pertenecen a la categoría de países urbanizados. De los seis analizados en este informe, sólo Paraguay (con más de un 40% de población rural y un 26% de participación de la agricultura en el PIB) se considera de base agrícola según la clasificación del Banco Mundial. A pesar de ello, en todos los casos la agricultura sigue siendo un sector estratégico en la generación de empleo, la balanza comercial, la seguridad alimentaria, el equilibrio territorial y el crecimiento económico de las áreas menos industrializadas.

Con excepción de Brasil y Colombia, la mayoría de las personas pobres en la región dependen de la agricultura para subsistir. En Perú, por ejemplo, según el estudio nacional realizado, más del 60% de los hogares bajo la línea de pobreza viven de la agricultura, proporción que se eleva al 80% en el caso de los hogares en la pobreza extrema. Por otro lado, la agricultura ha contribuido en la región a amortiguar los impactos de la crisis económica mundial, evitando que las tasas de crecimiento de la economía se retraigan aún más.

A medida que han ido creciendo otros sectores de la economía, la agricultura ha perdido peso relativo en el producto interno bruto (PIB). De representar entre el 20 y el 30% del PIB en 1960 pasó a menos del 10% en 2008 en cuatro de los seis países estudiados. Las dos excepciones a esta tendencia decreciente son Ecuador, con un aumento casi constante de la participación agrícola en el PIB desde 1980 (y un ligero descenso desde 2003) así como Paraguay a partir de 2001. En el caso de Ecuador, hay que señalar que este incremento responde a un fuerte impulso a la producción de banana, cacao y otros cultivos de gran escala.

Algunos estudios, sin embargo, defienden que el tamaño del sector agropecuario es mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales, pues éstas sólo valoran el aporte de la producción primaria. Si se tuviesen en cuenta los fuertes vínculos con los sectores de insumos agrícolas y de elaboración y distribución de alimentos, el impacto de la agricultura sobre la economía sería mucho mayor que el que expresan las cifras oficiales. Por otro lado, la forma habitual de medir el valor agregado excluye una parte muy importante del sector, al no contabilizar la agricultura de subsistencia ni todas las transacciones no comerciales o en el mercado informal.

Gracias a su abundancia en recursos naturales y a unas políticas enfocadas hacia la exportación, casi todos los países estudiados son exportadores netos de productos agropecuarios. Por el contrario, en varios de ellos resulta deficitaria la producción de alimentos básicos (cereales, en particular). Es el caso de Perú, Ecuador y Colombia, países altamente dependientes de las importaciones de alimentos, los cuales tienen precios cada vez más altos y volátiles en el mercado internacional. Esto los sitúa en una posición muy vulnerable en términos de seguridad alimentaria. Por ejemplo, en Colombia, casi tres cuartas partes de las importaciones agropecuarias son cereales, cuyos precios han sufrido las mayores oscilaciones en los últimos tres años. Por el contrario, otros países como Brasil, y Paraguay dependen en menor medida de las importaciones para satisfacer su demanda interna de alimentos básicos. Aunque finalmente, la capacidad de los países para hacer frente a las importaciones de alimentos dependerá, entre otras variables, del ingreso disponible en cada período y de los superávits fiscales que les permitan, entre otras cosas, realizar importaciones de emergencia o financiar programas de compensación.

Las brechas principales

Probablemente la mayor contribución del sector agropecuario se manifiesta en el empleo. Se trata de una actividad intensiva en mano de obra, lo que resulta evidente al comparar las tasas de empleo con la participación en el PIB nacional. La ocupación en esta actividad supone hasta un 40% en el caso de Bolivia –incluyendo tanto el empleo por cuenta ajena como por cuenta propia– donde el sector no llega al 13,5% del PIB. Lamentablemente, el empleo por cuenta ajena suele ser informal y mal remunerado. En Colombia, por ejemplo, en 2004 sólo el 4,5% de los trabajadores agrícolas asalariados contaban con un contrato de trabajo y estaban afiliados al régimen contributivo de salud.

La inequidad en el acceso a la tierra ha demostrado ser uno de los problemas más difíciles de resolver. En Brasil, por ejemplo, a pesar de

haberse puesto en marcha el mayor programa de reforma agraria en toda América Latina, la falta de equidad en la distribución de la tierra se ha profundizado. En 1970 las explotaciones de más de mil hectáreas ocupaban menos del 40% de la superficie agrícola, mientras que en 2006 (el censo más reciente disponible) ocupan casi la mitad de la tierra disponible (y están en manos de sólo el 1% de los propietarios). Según el mismo censo, de los 5 millones de explotaciones agropecuarias que hay en el país, 4,3 millones se clasifican como agricultura familiar. Sin embargo, todas juntas no ocupan más que el 30% de la superficie agrícola total, lo que muestra el alto grado de concentración de la tierra en el país.

En Perú también se está concentrando la propiedad, sobre todo en los valles costeros – donde apenas unas decenas de grandes grupos empresariales explotan fincas de más de 6.000 hectáreas en promedio - y en algunas áreas de la selva. Los cultivos que más se han extendido son el espárrago y la caña de azúcar para elaboración de etanol, ambos orientados hacia la exportación.

La tierra también está mal repartida en Ecuador, donde casi la mitad de los productores posee sólo el 2% de la superficie agrícola. Así como en Colombia, donde el 85% de los propietarios poseen fincas de menos de 20 hectáreas que ocupan en su totalidad menos del 19% del área cultivada. En este país, la población desplazada por el conflicto armado - más de tres millones de personas según las últimas estimaciones – ha perdido sus tierras y sus medios de vida, lo que se ha visto agravado con la promulgación de leyes que legitiman el despojo de la tierra.

Un caso extremo es Paraguay, donde según el último censo agropecuario (de 2008) las fincas inferiores a 20 hectáreas representan el 83,5% de las explotaciones, y sin embargo ocupan sólo el 4,3% de la tierra de cultivo. Dicho de otro modo, las fincas mayores de 20 hectáreas (que corresponden al 16,5% de las explotaciones) acaparan el 95,7% de la tierra agrícola. Una gran parte de la superficie en producción está ocupada por fincas ganaderas, mientras que el área dedicada a cultivos temporales - de los que depende principalmente la pequeña agricultura – apenas llega al 20%.

Las mujeres siguen siendo sistemáticamente discriminadas en el acceso a la tierra y el agua, a la tecnología y asistencia técnica, el crédito y los mercados. No suelen ser propietarias de la tierra que trabajan, en parte debido a normas consuetudinarias que les impiden heredarla. Se observa además que, cuanto mayor es el tamaño de las fincas, menor el acceso a su propiedad. En Ecuador, el 32% de las fincas de menos de 5 hectáreas pertenece a mujeres, frente a sólo el 9% de las fincas de más de 50 hectáreas. Y en Brasil, mientras que el 14% de las explotaciones de pequeña agricultura están dirigidas por mujeres, la proporción desciende a la mitad (7%) cuando se trata de la agricultura comercial.

Al no ser propietarias de la tierra, la mayoría de las mujeres están excluidas de los programas de crédito, de tal forma que sólo pueden acceder a éste a través de los sistemas informales, que exigen el pago de intereses desorbitados, o de los programas de microcrédito que gestionan muchas ONG, en los cuales sí suelen existir líneas específicas para mujeres. Menos

del 5% de las mujeres productoras recibieron crédito en Ecuador, frente al 8% de los hombres; además recibieron un monto inferior, pues el 85% de los fondos fueron a manos de los hombres. En Colombia, de todo el crédito concedido para actividades agropecuarias entre 2006 y 2009, apenas el 3,6% se entregó a mujeres.

La escasa visibilidad de su papel social y económico y la división sexual del trabajo suelen mantener a las mujeres excluidas de los espacios de poder. Al no participar activamente como actores políticos, difícilmente hacen escuchar su voz. Y de esta forma las políticas públicas y los programas de impulso al sector agropecuario que se ponen en marcha rara vez incorporan de forma adecuada la visión y las necesidades de las mujeres.

¿Y el papel de los Estados?

Los estudios nacionales encargados por Oxfam en seis países de América del Sur permiten observar cómo ha evolucionado el gasto en los últimos años. Aunque con marcadas diferencias entre países y a excepción de Paraguay y Bolivia (donde se ha mantenido en torno al 10% durante la última década, si bien esta cifra incluye los sectores forestal, la caza y la pesca), el gasto agropecuario ha ido decayendo durante las últimas tres décadas, hasta situarse entre el 1% y el 3% del gasto total. Una proporción muy por debajo del peso relativo del sector, que está entre el 6,5% y el 26%.

Incluso en países con fuerte crecimiento económico y un importante peso de la agricultura, el presupuesto agrícola no ha cesado de descender. En Brasil, por ejemplo,

entre 1995 y 2008 el gasto público aumentó a un ritmo cercano al 4% anual, y sin embargo el gasto agrícola se recortó un 3% en promedio cada año. En ese período, el gasto agrario per cápita rural cayó desde 700 a 450 reales brasileños

Probablemente más importante aún que el volumen del gasto resulta su orientación: qué prioridades se establecen en la asignación de los recursos, en respuesta a qué tipo de necesidades, y a quién favorece finalmente la inversión. Hasta el momento, las principales tendencias marcan mayor inversión en emprendimientos agroexportadores en Perú y Colombia, principalmente.

Entre las buenas noticias está el proceso de políticas públicas orientadas hacia la agricultura familiar en Brasil, lo que supuso una definición conceptual y jurídica de ésta; la propuesta de orientar una política agraria para “el buen vivir” en Ecuador y el interés del gobierno boliviano por mantener y aumentar inversiones en el rubro de la producción campesina. El principal problema es que hasta ahora se trata de planes, más que de proyectos en curso. Otros problemas en la región son: rezago en la investigación, miopía de género, baja ejecución presupuestaria y ausencia de políticas específicas para enfrentar el cambio climático.

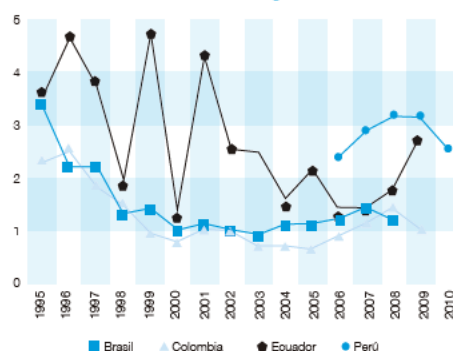
¿Por qué invertir en la pequeña agricultura?

Según los cálculos realizados para el informe mundial sobre Agricultura para el Desarrollo, del Banco Mundial, el crecimiento en la agricultura resulta entre dos y tres veces más eficaz en la reducción de la pobreza que el crecimiento en otros sectores. Aunque la evidencia

demuestra que cualquier tipo de crecimiento no sirve para alcanzar estos objetivos. El desarrollo agrícola sólo contribuye a reducir la pobreza si permite a las personas más pobres aumentar sus ingresos y bienestar, bien de forma directa generando empleos de calidad y oportunidades comerciales, o de forma indirecta mediante la redistribución de la riqueza y la inversión en servicios para la población.

En Sudamérica, ocho de cada diez explotaciones agropecuarias pertenecen a la pequeña agricultura. Ésta, según la Oficina Regional de la FAO, aporta entre el 30% y el 40% del PIB agrícola. 47 Aunque su contribución más importante es al empleo, pues absorbe entre el 60% y el 70% de la población ocupada en el sector. En Brasil, por ejemplo, de los casi 17 millones de personas que trabajan en la agricultura, más de 12 millones lo hacen en explotaciones familiares frente a menos de cinco millones en la agricultura comercial. (Ver gráfico 1).

Gráfico 1: Porcentaje del gasto público en el sector agropecuario entre 1995 y 2009



Fuente: Estudios nacionales encargados por OXFAM

Un importante argumento para invertir en la pequeña agricultura es la seguridad alimentaria. La mayoría de las personas que sufren hambre son productores y trabajadores agrícolas, por lo que invertir en

ellos aumenta la disponibilidad de alimentos al tiempo que contribuye a reducir la pobreza. Según la FAO, para alimentar a una población de 9.000 millones de personas en 2050 se necesita aumentar en un 70% la producción mundial de alimentos. Pero producir más no es suficiente, si los alimentos no se encuentran al alcance de quienes los necesitan. Y en esto juegan un papel esencial la producción a pequeña escala y los mercados locales de alimentos.

En la región, son precisamente los pequeños productores, y sobre todo las mujeres, quienes hacen llegar una parte importante de los alimentos a la mesa y a los mercados. En Brasil se calcula que el 70% del consumo nacional procede de la agricultura familiar. En Ecuador, ésta produce el 70% del maíz, el 64% de las papas y el 83% de la carne de bovino que se consumen en el país. Y en Bolivia, casi el 40% de la demanda nacional de alimentos se cubre con la pequeña agricultura. En América del Sur, donde se calcula que casi 52 millones de personas sufren hambre tras la crisis múltiple mundial - cifras que no se veían desde 1990 - un impulso a la pequeña agricultura tendría un triple beneficio: más alimentos disponibles en los mercados locales, mayor seguridad alimentaria en los hogares y un aumento de ingresos para las personas pobres.

Una razón última – y definitiva- para impulsar la agricultura campesina es el derecho de toda persona a disponer de un medio de vida sostenible y a salir por sí misma de la pobreza.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de la autora no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

¿En qué consiste el Seguro Agrario Pachamama?

Breves apuntes

Edwin Canedo*

La producción agrícola está expuesta a riesgos de distinto origen, y por su importancia en la economía éstos no sólo afectan a la economía de un país, a los productores agropecuarios, sino también a la sociedad. La exposición a los riesgos de origen climático son los que más llamaron la atención en los gobiernos especialmente en la última década, por la magnitud de los daños provocados. Hoy en día, tanto las prácticas productivas, como la organización comunal han ido perdiendo su "efectividad"

* Magister en Ciencias Agronómicas, Director General Ejecutivo del Instituto del Seguro Agrario (INSA).

por efectos de la globalización, el mercado, la revolución verde, el simple crecimiento demográfico y la desintegración social. Como resultado se tiene un incremento en la vulnerabilidad productiva de las familias campesinas por la pérdida de la biodiversidad; el manejo inadecuado de los recursos suelo y agua; y el deterioro de la organización productiva, que sumada a los efectos del cambio climático, se traducen en desastres naturales donde las familias campesinas pierden sus cosechas, y por ende, su seguridad alimentaria y generación de ingresos.

Para una mejor comprensión de estos desastres los hemos clasificado en directos, que se traducen en la: destrucción total o parcial de infraestructura, mobiliario y equipos asociados a los sectores productivos y sociales; además de mayor vulnerabilidad de la población y las instituciones, y por consiguiente menor capacidad de recuperación; los dos elementos mencionados líneas arriba suman mayores costos de atención, rehabilitación y recuperación productiva.

Los efectos indirectos incluyen los bienes que se dejan de producir y los servicios que se dejan de prestar durante y después del desastre; conllevan

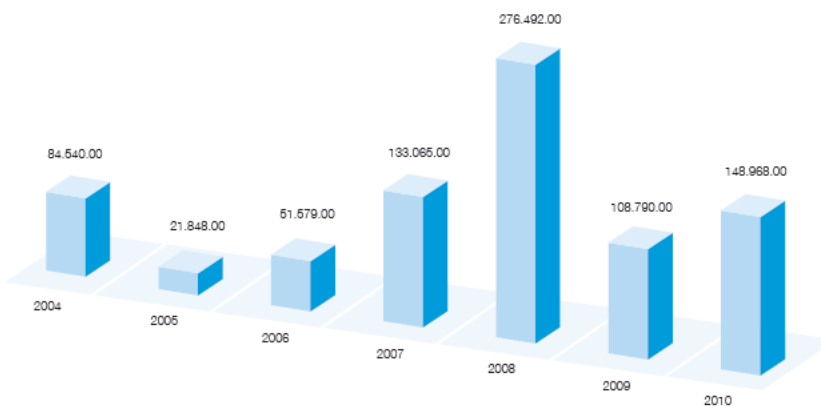


mayores y adicionales costos para la prestación de servicios por efectos del evento; por último estos desastres exigen la reorientación de recursos para atender y recuperar los servicios básicos y recursos de desarrollo para la población. Por lo anteriormente explicado es difícil cuantificar el impacto psico-social humano, familiar y social o la inseguridad producida por un desastre.

En consecuencia la incidencia ocasionada por estos daños tiene repercusión en el comportamiento de variables macroeconómicas como: el Producto Bruto Interno; la balanza comercial; las reservas monetarias; las finanzas públicas; la inflación; el empleo y el ingreso familiar.

En Bolivia las pérdidas acumuladas de acuerdo a información de la Unidad de Contingencia Rural - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra (UCR-MDRyT) en el período 2004-2010 por la ocurrencia de eventos climáticos adversos de gran magnitud ascienden a 825.282 millones de dólares tal como se observa en el cuadro.

Bolivia: Pérdidas en el sector Agropecuario 2004 - 2010 en Miles de \$us



Fuente: INSA

Ante la ocurrencia de estos desastres los gobiernos anteriores recurrían básicamente a dos fuentes para poder atender a los afectados: la ayuda externa y los recursos propios. Sin embargo, existe una tercera opción para poder atender a los productores y esta es la transferencia del riesgo a las aseguradoras, en tal sentido el Estado Plurinacional de Bolivia introduce en el texto de la Constitución (Artículo 407, Numeral 4) la creación de un Seguro Agrario para proteger a los productores del agro, esto se consolida con la promulgación de la Ley 144 y el Decreto Supremo 942.

Seguro universal pachamama

El objetivo principal del Instituto Nacional de Seguro Agrario (INSA) es: "proteger la producción agraria y los medios de subsistencia de los productores agropecuarios frente a eventos climáticos adversos, a través del desarrollo e implementación de mecanismos de transferencia del riesgo, con inclusión, corresponsabilidad, transparencia, reciprocidad, solidaridad y equidad", en ese sentido se tiene programado en el corto y mediano plazo transferir el riesgo del agro a una o más aseguradoras.

Por tanto se ha previsto, el desarrollo de distintas modalidades de aseguramiento en función a las características y necesidades particulares de los productores, los cultivos y cada región. Estas modalidades podrán ser:

Por la suma asegurada: de inversión (cubre inversiones realizadas en el cultivo) y de cosecha (cubre un porcentaje del rendimiento esperado al precio comercial pactado).

Por la cobertura: multirisgo y de riesgo nombrado o específico.

Por el tipo de ajuste, tipificadas como: paramétrico o por índices climáticos; por daño; catastrófico y rendimiento.

Estas modalidades permitirán al INSA desarrollar seguros en función a las necesidades específicas de los productores, por ejemplo, éstos podrán adquirir un seguro, que cubra: la inversión, contra un riesgo específico y que sea por rendimiento.

Sin embargo, en el marco del Decreto Supremo 942, se establece ya una primera modalidad que será implementada en municipios de extrema pobreza. Sus principales características son: un esquema de protección agrícola que permite hacer frente a los daños derivados de acontecimientos catastróficos, principalmente con los productores de escasos recursos. No es un seguro tradicional porque no cubre los costos de producción. La indemnización está dirigida a los productores agrarios más pobres ubicados en zonas rurales, para que puedan mantener a sus familias hasta que sus tierras recuperen la capacidad productiva. Se aplicará a extensas áreas de cultivos conformados por pequeños productores, estableciendo un valor asegurado por hectárea igual para todos los cultivos. El Estado tendrá disponibilidad de subsidiar hasta el 100% de la prima.

Inversión pública agropecuaria: desafíos y oportunidades

Rene Martínez Céspedes*

Fundación JUBILEO

Al analizar el crecimiento de la economía de Bolivia en la última década, se puede advertir que ésta tuvo una tendencia a aumentar, es decir que, en varias gestiones, el crecimiento del PIB fue más alto que el año anterior. En el caso específico del sector agropecuario, éste ha seguido una evolución bastante variante los últimos años, sin embargo el crecimiento del mismo se situó por debajo del crecimiento del PIB, con una tendencia disminuir. En los años 2007 y 2010 incluso se tuvieron cifras negativas, es decir que hubo una caída de la actividad o producción de este sector, que, entre otros aspectos, se debe a las condiciones climáticas negativas.

Siendo que el crecimiento del sector agropecuario fue menor, la participación del mismo, en la composición del total de la producción (del PIB) disminuyó en los últimos años.

Si bien se registra una disminución desde los años 90, esta situación se agravó en los últimos años. En 1990, el sector agropecuario representaba el 15,35% del total del producto, el 2000 fue de 14,22%, el 2003 llegó nuevamente a 15% y de ahí en adelante disminuyó hasta el 12,42% en 2011. Cabe señalar que los sectores que tuvieron un crecimiento en su participación en la composición del PIB son principalmente los extractivos (hidrocarburos y minería).



Inversiones en el sector

Además de las condiciones climáticas, el desarrollo agropecuario, como cualquier otro sector, depende de las inversiones que se realicen.

Con relación a la inversión pública total (en todos los sectores), ésta aumentó significativamente en los últimos años, principalmente por la disponibilidad de mayores ingresos provenientes de hidrocarburos. Si bien la inversión pública en el sector

agropecuario tuvo un crecimiento, éste ha sido comparativamente menor con relación al total.

La participación de la inversión en el sector agropecuario, con relación a la inversión pública total, disminuyó gradualmente de 9,2%, en los años 2001 y 2002, a 6,2% en 2011. Para la gestiones 2012 se tiene presupuestado uno porcentaje 6,3%.

En síntesis, en un escenario en el cual la producción agropecuaria está perdiendo su participación y en el que la necesidad de inversión es

* Economista con Maestría en Proyectos. Actualmente especialista en Presupuestos Públicos de Fundación Jubileo.

ahora mayor por efectos del cambio climático, no se percibe que el sector público esté realizando los esfuerzos necesarios para impulsar este sector.

Los últimos años hubo mayor liquidez en la economía –principalmente por el dinero de sectores como los hidrocarburos–, por tanto, la demanda de los diferentes bienes y servicios de la economía se incrementó, pero si ésta no es acompañada por una mayor oferta, existe el riesgo de inflación y/o escasez. El sector agropecuario es fundamental en la producción de alimentos, pero requiere de impulso y soluciones estructurales para enfrentar las presiones inflacionarias o riesgo de desabastecimiento. De lo contrario, en lugar que el país se beneficie con mayor producción y empleo, se estaría favoreciendo la importación y contrabando de alimentos extranjeros.

La agricultura, ganadería, caza y pesca, así como los proyectos de riego, son competencias del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, por lo que darle el impulso necesario, es tarea del Estado en su conjunto y, por supuesto, requiere también de la participación del sector privado, el cual necesita de legislación que le otorgue seguridad.

Inversión de las Gobernaciones

La mayor parte de la inversión pública en el sector agropecuario es realizada por los gobiernos departamentales. El siguiente cuadro muestra la distribución del presupuesto de inversión de las gobernaciones por sector.

**Presupuesto de inversión 2012 por sector
gobiernos departamentales
(en Bolivianos)**

Sector	Chuquisaca	La Paz	Cochabamba	Oruro	Potosí	Tarija	Santa Cruz	Beni	Pando	Total General
Transportes (caminos y otros)	117.169.813	214.639.408	30.018.617	37.793.001	383.197.890	486.623.878	78.621.492	23.621.252	26.683.924	1.398.369.275
Agropecuario	46.780.208	67.568.104	35.169.783	16.968.195	144.737.571	362.129.472	48.950.963	25.915.314	13.927.129	762.146.739
Energía	36.464.415	51.301.168	4.000.000	11.846.105	73.644.396	124.201.273	22.663.362	3.750.000	23.884.037	351.754.756
Multisectorial	19.369.143	11.419.445	10.378.038	12.283.944	37.954.078	38.256.626	58.365.371	11.333.381	18.349.055	217.709.081
Urbanismo y Vivienda	5.688.665	36.984.987		9.744.982	11.800.000	104.888.421	26.343.672	4.590.395	7.112.966	207.154.078
Educación y cultura	5.583.415	4.094.692	3.635.952	1.763.269	49.581.325	50.081.100	22.405.761	2.131.640	5.816.224	145.093.378
Recursos hídricos		148.447	1.108.101	3.134.807	12.085.789	114.857.375	3.240.516		300.000	134.875.035
Industria y turismo	1.677.108	22.766.329	1.253.599	1.850.800	18.885.798	52.060.190	16.415.041	800.000	13.280.014	128.988.879
Saneamiento básico	6.003.637	9.827.241	201.165	2.225.294	4.683.655	56.982.513	17.481.487	3.663.324	8.388.153	109.456.469
Salud y seguridad social	600.000	12.439.833	1.164.723	9.998.051	4.247.000	45.705.583	10.015.013	8.133.029	6.801.998	99.105.230
Justicia y policía	200.000	1.780.030	2.332.571	50.000	8.160.488	28.942.684	3.000.000		8.194.455	52.660.228
Minero			2.680.000	2.199.548	1.500.000		1.715.500			8.095.048
Comercio y finanzas				3.640.000		489.360				4.129.360
Comunicaciones				1.000.000						1.000.000
Hidrocarburos			550.000			300.310				850.310
Total general	239.536.404	432.969.684	92.492.549	114.497.996	750.477.990	1.465.518.785	309.218.178	83.938.335	132.737.945	3.621.387.866

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del VIPFE

Como se observa, las gobernaciones en su conjunto cuentan con un total de 3.621 millones de bolivianos destinados a la inversión pública para el 2012, de la cual una gran parte (Bs 1.466 millones) corresponde a la Gobernación de Tarija, puesto que es el departamento que cuenta con mayores recursos provenientes de hidrocarburos.

De acuerdo a la asignación de recursos entre los diferentes sectores, las gobernaciones han priorizado, en primer lugar el sector transportes (caminos y otros) y en segundo lugar el sector agropecuario. Del total de la inversión de las gobernaciones del país, el 21% es destinado al sector agropecuario y en el caso de Tarija éste asigna un 25% de su inversión al sector agropecuario, encontrándose por encima del promedio nacional.

Aún el país cuenta con importantes recursos, incluso con saldos en cuentas bancarias de presupuestos sin ejecutar, con los cuales puede impulsar la producción en sectores como el agropecuario a través de la inversión, y así frenar o revertir la disminución de la participación agropecuaria en el PIB nacional. Y en el caso específico del departamento de Tarija, la oportunidad de poder desarrollar éste u otros sectores es mayor por los cuantiosos recursos que recibe.

La Constitución establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. Asimismo, el Plan de Desarrollo del actual gobierno plantea transformar la matriz y patrón de desarrollo orientando los excedentes económicos de sectores estratégicos como hidrocarburos hacia sectores generadores de ingresos y empleo. En tanto no se asignen mayores recursos a las inversiones en sectores productivos como el agropecuario no se cumplirán estos planteamientos.



El largo proceso para cosechar agua

La experiencia de la comunidad Piedra Larga

Fuente:

Virginio Paredes

*Dirigente y representante de Prosol
Comunario de Piedra Larga*

Piedra Larga es una comunidad ubicada en el municipio de Entre Ríos provincia O'Connor del departamento de Tarija; allí se recuperaron las experiencias y percepciones que tienen los comunarios respecto a la implementación y uso del Programa Solidario Comunal PROSOL.

El PROSOL es un triunfo del esfuerzo mancomunado entre las organizaciones campesinas y las organizaciones indígenas del departamento de Tarija, que nace de la demanda desde hace nueve años atrás cuando las calles de Tarija fueron ocupadas por miles de campesinos y campesinas a la cabeza de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) para sensibilizar a la población ciudadana, de las inquietudes y necesidades de este sector.

El PROSOL es un programa que se ejecuta desde 2008, con un aporte de Bs. 2.000 por familia, en el año 2011 se incrementa a Bs. 4.500 como nuevo capital de arranque para potenciar la producción comunitaria social y encaminar el trabajo agrícola a gran escala con Seguridad y Soberanía Alimentaria.

“El PROSOL es un programa que se ejecuta desde 2008 (...) para potenciar la producción comunitaria social y encaminar el trabajo agrícola a gran escala con Seguridad y Soberanía Alimentaria. Estas son algunas historias de diferentes comunidades tarijeñas”



La conformación del primer comité del PROSOL, en la comunidad de Piedra Larga fue una tarea difícil, por las funciones que debían cumplir en las tareas de campo y los exigentes requisitos para presentarse en la ciudad de Tarija. El comité del PROSOL, fue conformado en una reunión con la comunidad, los representantes cambian cada año.

El primer comité estaba conformado por Patricio Manpaso, Sergio Quispe y Sebastián Choque, y el número de familias beneficiadas fue de veinticinco, que se incrementó para el segundo y tercer año (2009 y 2010) a treinta y dos familias.

Durante el primer año, de puesta en marcha de este mecanismo, la comunidad de Piedra Larga procedió a la compra comunal de alambrado y postes para cercar los chacos de todas las familias de la comunidad, ese año (2012) se procedió a la entrega de tres rollos de alambrado por familia.

El segundo comité estuvo conformado por: Bernardo Flores, Adolfo Quispe y Santiago Torres. Este utilizó el PROSOL, para la entrega de insumos y elementos productivos.

Dentro de los elementos productivos que han sido adquiridos a través de este mecanismo por parte de la comunidad, se tiene: alambres, asadones, palas, carretillas, picos, y motobombas -éstas últimas fueron adquiridas entre dos personas-, herramientas de mano, postes para alambrado y animales -en este caso no se evidenció mucha utilidad pues muchos animales murieron, por las condiciones climáticas de la región.

Resultados, beneficios y dificultades de la experiencia

De acuerdo a los criterios recogidos en la comunidad de Piedra Larga, los resultados del PROSOL, se ven en el largo, y en algunos casos como es de las motobombas mediano plazo, “las cosas que hemos adquirido hasta ahora no son duraderas (esto depende del uso que le da cada familia). Las maquinarias que se han comprado quedan y sirven más con el tiempo que los animales que hemos adquirido” afirma uno de los comunarios.

Hasta la fecha los resultados de la aplicación de PROSOL son pocos la causa reconocida por los propios comunarios: la ausencia de consensos, la disidencia de opiniones. Algunos campesinos han reconocido que requieren animales de raza para mejorar su producción; otros, en cambio, necesitan implementos para el campo, las necesidades varían en la comunidad.

Este mecanismo constituye un incentivo para el trabajo en el campo, así lo reconoce un comunario “ha sido satisfactorio cuando nos enteramos del PROSOL, porque podemos adquirir desde una carretilla, un azadón lo que ha sido bueno, y generó en las personas ganas de trabajar”.

Al estar actualmente en proceso de implementación, el PROSOL, es perfectible, los campesinos de Piedra Larga han identificado que, el mismo, no ha logrado cubrir las necesidades de toda la comunidad. Por otro lado se han presentado conflictos por el manejo, sin embargo reconocen “supimos resolverlo internamente y no pasaron a mayores dificultades”.

“No hemos hecho atajados porque la maquinaria para traer hasta aquí es costosa, el PROSOL era de Bs. 2.000 y no alcanzaba, ahora con lo que se aumentó, se puede pensar las acciones más grandes”.

Los campesinos reconocen que todavía falta mucho por hacer “nos falta trabajar con más fuerza el PROSOL, necesitamos más información, concientización y conocer más el Reglamento, incluso que nos asesoren en las compras o productos que adquirimos, así tendremos más alternativas en qué invertir”.

La comunidad de Piedra Larga, tiene claro que es importante realizar acciones que tengan impactos que beneficien a todos, en ese sentido han programado la construcción de estanques, riego a goteo, proyectos en los que se aproveche el agua como recurso vital. “Nosotros tenemos agua pero con el PROSOL pudiéramos aprovecharla de mejor manera. Por otra parte la tierra de nuestra comunidad es quebrada, no es como en otras comunidades planas o valles, aquí se la utiliza para vivir se usa para consumo, la tierra no da para más, por eso nuestra situación no es igual a otras comunidades”, concluye Virginio Paredes (dirigente y representante del PROSOL de la comunidad de Piedra Larga).

De lo que se trata es utilizar estos recursos en proyectos de largo alcance que generen bienestar en la comunidad, “sería bueno que se invierta el PROSOL en la cosecha de agua, aplanado de nuestros terrenos, riego a goteo, para así regar bien nuestros terrenos, en proyectos de forestación y aljibes, ya que hay poca agua en esta zona”.

Esfuerzos gestionados eficientemente

Fuente:

Facundo García

*Presidente del Comité del PROSOL
Comunidad de Rujero. Provincia Avilés*

La comunidad de Rujero ha logrado gestionar tres Prosoles (en las gestiones 2009, 2010, 2011), las iniciativas estuvieron canalizadas a: mejoramiento de atajados, mallas olímpicas y motobombas. El tiempo de gestión ha sido relativamente rápido en comparación con otras comunidades vecinas, los comités han funcionado sin mayores dificultades, las rendiciones de cuentas se han realizado en los plazos programados y las iniciativas se han ejecutado en el tiempo previsto.

“En la comunidad hemos adquirido mallas olímpicas para cerramientos de huertos hortícolas; corrales para la crianza de ganado caprino y ovino; motobombas para la utilización de agua de riego complementario en cultivos que son sembrados en época de verano, construcción y mejoramiento de atajados de tierra para cosechar agua de lluvia” sostiene Facundo García comunario del lugar.

Las prioridades de Rujero se identifican en reuniones comunales, donde participan todas las personas que son afiliadas al sindicato, las iniciativas se definen de acuerdo al

reglamento que tiene el PROSOL, en la comunidad y por lo general se prioriza más de una iniciativa, por ejemplo: malla olímpica, construcción de atajados y motobombas. Un elemento importante es que siempre se está priorizando la temática del agua para uso de riego y del ganado.

La comunidad de Rujero está organizada un en sindicato comunal con 80 afiliados, de los cuales 65 son jefes de hogar y acceden al PROSOL comunal, estos participantes son miembros activos de la comunidad, que están avalados por la máxima instancia que es la reunión comunitaria.

Para gestionar el PROSOL, se designa un comité elegido en la reunión comunitaria. Este comité está formado por un presidente, un secretario de actas y un secretario de hacienda, estas personas son las encargadas de realizar la gestión, la adquisición y entrega de los materiales, insumos u otros elementos productivos.

En muchos casos el PROSOL ha permitido la cosecha de agua para riego complementario de los cultivos que se siembra en época de

verano, es decir se asegura el ciclo productivo de algunos cultivos.

También ha generado mano de obra, es decir trabajo en la comunidad, lo que hace muchas familias no salgan de la comunidad en busca de trabajo a otros lugares. El PROSOL es un importante recurso para implementar iniciativas productivas, decididas por la propia comunidad. Los recursos son gestionados y manejados por los propios comunarios.

En algunos casos, no se identifican iniciativas productivas acordes a la vocación productiva de la comunidad o no se pueden monitorear estos procesos en la unidad gestora, por encontrarse en la ciudad de Tarija, lo que dificulta la gestión de estos recursos en las comunidades.

El PROSOL genera trabajo para varias familias en la comunidad, y se ha dado un incremento en la producción de cultivos, lo que a su vez, ha generado un alza en el ingreso de algunas familias que se dedican a la producción agrícola. Quizá uno de los efectos más significativos de este mecanismo en Rujero es la reducción de la erosión hídrica, por la construcción de atajados en la comunidad.

Instituciones organizadoras:



El **Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)** es una iniciativa especializada en desarrollo rural, que complementa otras acciones originadas en distintos ámbitos de Estado y sociedad civil desde una perspectiva circunscrita a Sudamérica.
www.sudamericarural.org



Bolivia Rural es un medio de información y comunicación electrónico especializado en desarrollo rural boliviano como una base para convertirse en una oferta compleja y diversificada de comunicación virtual que incluya espacios interactivos abiertos al público, de manera que la población no sólo reciba información, sino también la genere y la comparta.
www.boliviarrural.org



La **Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE)** es una Red de Organizaciones No Gubernamentales (ONG s) o Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS) conformada por 20 instituciones, de carácter laico y sin fines de lucro, que coadyuvan en la lucha contra la pobreza a través de programas de desarrollo urbano y rural, dentro las temáticas de Municipio Productivo, Desarrollo Económico Local, Seguridad Alimentaria Nutricional, Soberanía Alimentaria, Medio Ambiente, entre otras; promoviendo los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), junto con la incidencia o cabildeo en políticas públicas y plataformas de reflexión de la sociedad civil.
www.aipe.org.bo



La **Fundación Jubileo** es una institución de la Iglesia Católica de Bolivia y Alemania que presta servicios a la sociedad civil boliviana, desde las dimensiones del análisis crítico y la investigación de la realidad, la formación ética, social y política.
www.jubileobolivia.org.bo



La **Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO)**, es una institución de inspiración cristiana liberadora, con voz propia, que trabaja en el Sur de Bolivia en interacción con organizaciones de pueblos indígenas originarios campesinos y urbano-populares, para incidir con propuestas de políticas públicas que promuevan la construcción de una sociedad más democrática, solidaria justa, equitativa, intercultural y respetuosa con el medio ambiente, en el ámbito local, regional, departamental y nacional.
www.aclo.org.bo



El **Instituto de Investigación y Capacitación Campesina (IICCA)**, es una Institución Privada de Desarrollo Social sin fines de lucro, de promoción integral campesina y orientada al desarrollo rural sostenible, con enfoque de género, generacional y agroecológico. Su propósito es aportar a la construcción de una sociedad con equidad y justicia social, con la participación activa de hombres y mujeres campesinos organizados del Departamento de Tarija, en el marco del desarrollo rural sostenible y en un proceso de autogestión y autodeterminación campesina.
Email: iicca.tja@gmail.com



La **Asociación Social Tarija (ASOCIO)**, es una institución que fomenta procesos de innovación tecnológica participativa, promueve la seguridad alimentaria el desarrollo local sostenible con las familias campesinas, buscando acciones coordinadas y alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones campesinas.
Email: asocio.tja@gmail.com



La **Gobernación Autónoma del Departamento de Tarija**, tiene como misión promover el desarrollo armónico departamental en el marco de la constitución Política del Estado, los objetivos, políticas y estrategias de Desarrollo Nacional, representando los intereses y aspiraciones de la región para lograr mejores condiciones de vida para sus habitantes, a través de formulación de planes, programas y proyectos de inversión.
www.tarija.gob.bo



Empresa consultora agrícola especializada en investigación aplicada. Ha investigado, difundido y prestado asistencia técnica en la producción de Ajo, Arándano, Espárragos, Vid y Nopal en el sur de Bolivia.
Email: marcalconsultores@gmail.com